

actualidad

Movilizaciones contra los recortes educativos

Comunidad de Madrid

Huelga masiva del profesorado contra los recortes y el despido de 5.000 interinos

LOS SINDICATOS y la comunidad educativa madrileña se han levantado contra los recortes educativos impuestos por el Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Esperanza Aguirre. Desde que el 31 de agosto se celebraron las primeras asambleas, se han sucedido encierros, concentraciones, manifestaciones y la huelga de los días 20, 21 y 22 de septiembre, secundada masivamente por el profesorado, para exigir la retirada de las instrucciones de los dos últimos cursos, causantes de la pérdida de 5.000 empleos y del deterioro del servicio educativo público. Pero, sepamos ver la paja en el ojo ajeno: lo que pasa en Madrid ha empezado a pasar en otras comunidades gobernadas por el PP y sospechamos que si el PP gana las próximas elecciones generales pasará en todo el Estado.

Desde 2008 CCOO viene denunciando y movilizándose contra la política educativa y la organización de los centros propuestas por Gobierno madrileño. Este comienzo de curso el profesorado y la comunidad educativa, hartos de padecer las nefastas consecuencias sobre el empleo y el servicio educativo, están movilizándose masivamente contra los recortes que la presidenta Aguirre y su consejera de Educación, Lucía Figar, han decretado con estiaje y alevosía en la enseñanza pública.

Ya en el año pasado, pero mucho más abusiva y claramente en este curso, las instrucciones de inicio de curso determinaban unas condiciones de trabajo injustas e ilegales que impiden atender un servicio educativo público en el que, además, han solicitado ser escolarizados 10.000 alumnos más que en el curso 2010-2011.

La presidenta del PP madrileño y del Gobierno regional, y otras personalidades del PP, acompañan estas instrucciones que descaradamente publica en el Boletín Oficial de la Comunidad el 5 de julio de 2011, con declaraciones en las que miente –dice que los profesores solo trabajamos 20 horas a la semana o de las que se deducen insultos al colectivo –los profesores son insolidarios con la crisis, son unos vagos, están muy bien pagados.

Las instrucciones obligan a una distribución horaria de la jornada de los docentes –treinta y siete horas y media a la semana– distinta a la que establecen los vigentes reales decretos sobre reglamento orgánico de centros y la orden sobre organización y funcionamiento de centros. Esta modificación en síntesis contiene 20 horas lectivas para todo el profesorado y la consideración como no lectivas de la hora de tutoría con alumnos, las horas de dedicación a jefatura de departamento y a coordinaciones, los desdobles, refuerzos y profundizaciones.

Independientemente de la decisión que adopten los tribunales –CCOO ha recurrido estas instrucciones porque considera que son ilegales–, las consecuencias prácticas en el empleo, en las condiciones laborales y en el servicio educativo que recibe el alumnado que asiste a los centros educativos públicos son evidentes:

- Si los 45.000 profesores de la pública no universitaria trabajamos dos horas lectivas más a la semana, como cada hora lectiva –por encima de 18 horas a la semana–, la norma vigente reconoce que debe ser compensada con 2 horas complementarias a la semana, cada profesor dejaría de impartir 6 horas complementarias las 4 de compensación, más las 2 lectivas–, es decir, los alumnos y sus familias no podrían recibir orientación académico-profesional, atención a la diversidad, carecerían de coordinación didáctica...
- Si los 45.000 docentes de la pública no universitaria aumentan dos horas a la semana su horario lectivo, en el servicio desaparecen 90.000 horas lectivas, que divididas entre 20 horas –ilegales, pero número de horas establecido en las instrucciones–, que daría cada profesor, las personas que quedarían sin empleo serían 4.500.

La gravedad, responsabilidad e intenciones de la presidenta Aguirre en este caótico inicio de curso, en el que quienes necesitan empleo y recursos para construir un aprendizaje significativo son agredidos y abandonados en el paro o en la calle, son claras: Esperanza Aguirre y el PP madrileño quieren trasvasar el dinero, que tenían previsto gastar en empleo y enseñanza pública, a la reducción del déficit, a las familias con ingresos de hasta 35.000 euros por miembro de la unidad familiar –a las que se les dan ayudas para pagar sus gastos de comedor y uniforme en centros privados– y a los titulares de los centros concertados, que podrán seguir explotando a sus trabajadores pero ven incrementados sus ingresos por gastos de funcionamiento.